

052200

**Señor
EVER JOSÉ PATERNINA BALETA****ORIGEN:** DIANA MARCELA ACOSTA RUBIO - 052200-
Subdirección De Bienes Y Servicios**DESTINO:** EVER JOSÉ PATERNINA BALETA CONSORCIO
PATERMEN - -**TIPO DE** Comunicaciones oficiales**DOCUMENTO:****ASUNTO:** Respuesta OFICIO CIPM-208 del 05 de febrero de
2024

CONSORCIO PATERMEN

Calle 32ª No. 36 – 104 apto 1004 B, Edificio Altos de Venecia, Av. Sincelejito
everjosepaternina@gmail.com

Asunto: Respuesta OFICIO CIPM-208 del 05 de febrero de 2024

Respetado señor Paternina,

Con respecto a su solicitud relacionada con la suspensión del contrato de obra No. 3644036 de 2022, la entidad se permite dar respuesta en los siguientes términos: El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, en sentencia proferida el 11 de abril de 2012, dentro del radicado No. 52001-23-31-000-1996-07799-01(17434), ha indicado lo siguiente (...) *“La suspensión del contrato, más estrictamente de la ejecución del contrato, procede, por regla general, de consuno entre las partes, **cuando situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público impidan, temporalmente, cumplir el objeto de las obligaciones a cargo de las partes contratantes**, de modo que el principal efecto que se desprende de la suspensión es que las obligaciones convenidas no pueden hacerse exigibles mientras perdure la medida y, por lo mismo, el término o plazo pactado del contrato (de ejecución o extintivo) no corre mientras permanezca suspendido. Por esa misma razón, **la suspensión debe estar sujeta a un modo específico, plazo o condición**, pactado con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, acorde con la situación que se presente en cada caso, pero no puede permanecer indefinida en el tiempo”*. (negrilla fuera de texto)

Así mismo la cláusula 11 – SUSPENSIÓN del contrato, establece *“Las partes podrán de mutuo acuerdo suspender el presente contrato, **de manera excepcional y debidamente sustentado**, mediante la suscripción de un acta en donde conste tal evento. El plazo de suspensión no ampliará el plazo de ejecución del contrato, ni dará derecho a exigir indemnización, sobrecosto o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los pactados en el contrato. Para el efecto, se tendrán en cuenta las siguientes causales: **a) Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o interés general que impidan la ejecución temporal, debidamente comprobados. b) A solicitud debidamente sustentada interpuesta por una de las partes”***. (negrilla fuera de texto)

El consejo de estado mediante radicado 11001-03-06-000-2016-00001-00(2278), respecto de la suspensión del contrato ha indicado que:

*“(…) Así las cosas, la suspensión acordada de la ejecución de los contratos **no puede convertirse en un mecanismo para amparar incumplimientos de cualquiera de las partes, o corregir los efectos del incumplimiento**, pues no está concebida como una figura que exonere a la entidad estatal de su deber de planeación, ni el deber del contratista de cumplir cabalmente sus obligaciones. Su finalidad es preservar el vínculo contractual cuando surgen eventos de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impidan temporalmente la ejecución del negocio jurídico. (…)*” (negrilla fuera de texto)

Así mismo con respeto a la primacía de los fines del estado en la ejecución de los contratos estatales ha mencionado que:

*“(…) **b. La primacía del interés general y el principio de conservación del contrato en la persecución de los fines de la contratación estatal.***

Ha coincidido la jurisprudencia en que el fin de la contratación estatal en el Estado Social de Derecho se asocia directamente al interés general, puesto que el contrato estatal es uno de los “instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas.²⁴ Es por eso que, a más del principio de la autonomía de la voluntad, la aplicación de la figura de la suspensión temporal encuentra sus límites y fundamento en la primacía del interés general como causa de la contratación estatal, y en la consecución de los fines del Estado²⁵ tal como lo dispone el artículo 3 de la Ley 80 de 1993.

“Artículo 3º.- De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones”.

(…)

Por otro lado, correlativamente, la Ley 80 de 1993 exigió a los contratistas:

“Artículo 5. De los derechos y deberes de los contratistas. Para la realización de los fines de que trata el Artículo 3º de esta Ley, los contratistas:

(...)

2º. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entramamiento que pudieran presentarse.

(...)” (Resalta la Sala).

Las reglas de conducta transcritas, impuestas a la Administración y a los contratistas, resultan relevantes para la conservación del contrato, pues exige de los contratantes el despliegue de toda actividad necesaria para cumplir con el objeto contratado, lo que se traduce en empeño para que a través de la contratación se logren los fines públicos. (...)”

Con respeto al caso fortuito o fuerza mayor, el Código Civil Colombiano establece en su artículo 64 lo siguiente:

“ARTICULO 64. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. *Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”*

Ahora bien, en cuanto a las razones o hechos por usted indicados en el oficio como justificación para la suspensión del contrato, se hacen las siguientes claridades:

La entrega de la garantía es responsabilidad exclusiva del contratista y el trámite de expedición por parte de la aseguradora no constituyen FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, que de origen a la suspensión del contrato.

Los trámites que deben adelantarse para la respectiva expedición por parte de la aseguradora se encuentran a cargo del contratista, y tal como se evidencio en el correo remitido por la señora NAIDITH LORENA CASTRO PERALTA, auxiliar de suscripción de la Aseguradora Solidaria de Colombia, existe una falta de entrega de documentación necesaria para el trámite, lo cual al menos merece un reproche de irresponsabilidad por parte del contratista, teniendo en cuenta que, en el marco de sus obligaciones, debió realizar los trámites correspondientes.

Finalmente, se reitera que tal como se ha venido indicando en varias oportunidades, la suspensión se aplicará cuando se presentes circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o interés general, lo cual deberá estar debidamente comprobado y sustentado; es así que atendiendo a que la aseguradora continua con el trámite de actualización, y de que no se tiene una fecha estimada para que se surta dicho

trámite, no evidencia una justificación más que la falta de incumplimiento de una de sus obligaciones, y por lo tanto desde la Entidad no es viable tramitar la respectiva suspensión en los términos indicados en su oficio.

Cordialmente,

Elaboró: Catalina Gutierrez - Contratista Subdirección de Bienes y Servicios